



AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA

PRESIDENCIA

**Acuerdos adoptados en la Jornada de unificación de criterios de las secciones penales de la Audiencia Provincial de Valencia, celebrada el día 18 de enero de 2024.**

La **primera cuestión** planteada gira en torno al cumplimiento de la libertad vigilada consistente en la obligación de participar en programas formativos de educación sexual y similares previsto en el artículo 106 del código penal, cuando el penado no ha estado en Centro penitenciario como sucede cuando se le concede la suspensión de la pena privativa de libertad.

En este caso, ninguna administración se hace cargo del cumplimiento de la pena, ya que se han declarado incompetentes, tanto la administración penitenciaria como la comunidad autónoma valenciana por entender que es competencia del Estado y dirigida solicitud al ministerio de justicia lo ha devuelto sin resolver.

Por los magistrados presentes quieren hacer constar y reflejar la problemática que se plantea, proponiendo que se remita oficio a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, planteando la cuestión, para que a su vez, lo haga llegar a las administraciones competentes con el fin de que se encuentre una solución al problema tratado, permitiendo así a los órganos judiciales que hagan efectiva todas las penas impuestas en sentencia, siendo ésta una exigencia del artículo 117 de la Constitución española, que atribuye a los jueces no solo la función de juzgar, sino también de ejecutar lo juzgado.

La **segunda cuestión** se refiere a la interpretación que debe darse a la orden 28/2021 dictada por la Secretaría General de instituciones

penitenciarias, relativo al protocolo de ingreso directo de los penados en medio abierto, como se indica en el protocolo está previsto para aplicar a los Penados de forma inicial el tercer grado del régimen penitenciario (medio abierto).

Este procedimiento está aplicándose con carácter general desde hace un par de años, el protocolo está previsto su aplicación para penas de prisión que no superen los cinco años, esto supone que muchas penas a las que por la audiencia Provincial o por los juzgados de lo penal se le deniega al penado la suspensión por entender que no sean merecedores de la misma, los penados acuden al CIS y tras una simple entrevista acceder al tercer grado penitenciario sin que el órgano sentenciador tenga conocimiento de ello o pueda oponerse a dicha decisión, dado que muchas veces no son consciente que el penado directamente ingresado en el tercer grado penitenciario.

Por los magistrados presentes consideran que se trata de una cuestión que compete a la administración penitenciaria en virtud de la orden mencionada y que el único control que puede efectuar el órgano sentenciador resulta del supuesto en que se plantee algún recurso de apelación contra la decisión adoptada por la administración penitenciaria.

La **tercera cuestión**, hace mención a la falta de transcripción de las declaraciones efectuadas en los juzgados de instrucción tomadas por el sistema "Arconte".

Los magistrados presentes se remiten y reiteran, el acuerdo anterior adoptado por esta Audiencia Provincial relativa a la necesidad de transcribir las declaraciones practicadas en instrucción cuando se remitan a la Audiencia Provincial para conocer de los recursos que le sean competentes.

También se hace mención a la necesidad de una adecuada itineración, por el sistema informático, a la Audiencia Provincial de las causas que se remitan por los juzgados de instrucción y de lo Penal de la provincia, así como de una correcta remisión de las causas por parte de los Juzgados unipersonales a la Audiencia Provincial, a fin de resolver los recursos planteados.

Por parte de los magistrados presentes se destaca la necesidad de comunicar a los juzgados unipersonales de la provincia, la necesidad de *itinerar informáticamente* a la Audiencia Provincial las causas que remitan para conocer de los recursos de apelación. Asimismo, se les comunique que no existe obligación legal de remitir las piezas que se abren junto a la pieza principal en un procedimiento, relativas tanto a la situación personal de los investigados como a las piezas de responsabilidad civil, dichas piezas deben permanecer, por exigencia legal, en los juzgados unipersonales hasta que la tramitación de las mismas esté finalizada.

En relación con estas cuestiones, por parte de los magistrados se solicita que se comunique a la administración competente, la conveniencia de mejorar la aplicación del programa "*visor*" con la finalidad que pueda funcionar como un instrumento útil para los magistrados y que les permita, con esta aplicación, tener acceso a todas las resoluciones judiciales que consten incorporadas en un procedimiento.



